

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), E INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA LA TRANSCRIPCIÓN DE VOZ Y ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES EN CONSULTAS MÉDICAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (C11.I03.P14.S13)

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se exponen a continuación los fines institucionales del organismo proponente cuyo cumplimiento requiere la realización de esta contratación. Igualmente, y a tal efecto, como parte de la documentación preparatoria, se determinan con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

Según se dispone en el Decreto 76/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y según Decreto 261/2023, de 29 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Digitalización, corresponde a la Dirección General de Salud Digital (DGSD): “La planificación, diseño, implantación y mantenimiento de los sistemas y tecnologías de la información para la organización y funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo con las necesidades explicitadas por este último, así como la tramitación electrónica en el Servicio Madrileño de Salud” y “La provisión y gestión de los servicios y equipamientos informáticos sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, en colaboración con el Servicio Madrileño de Salud”.

Dentro del Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria se establecieron diferentes Grupos de Trabajo y Líneas de Actuación. En cada uno de los Grupos de Trabajo constituidos, existen cuatro roles de participación diferenciados para las CC.AA. intervinientes: Líder, Participante, Interesado y Alineado.

En el seno del citado Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria, la Dirección General de Salud Digital (en adelante, DGSD) desempeña el rol de Comunidad Autónoma de “Líder”, adscrito al Grupo de Trabajo GT7 Tecnologías Transversales y línea de Actuación “7 Soporte a la Decisión Clínica/IA, cuyos objetivos son:

- Establecer un conjunto de estándares normalizado para el intercambio de desarrollos de casos de uso de inteligencia artificial. Estos estándares abarcan tanto el empaquetamiento y gestión del

ciclo de vida de los modelos como la normalización de los datasets sobre los que se trabaja con los modelos.

- Definición de un repositorio de casos común para las CCAA.
- Identificación (catálogo) de casos de uso y ámbitos AP enfocados al soporte a la decisión tanto clínica como no clínica.
- Definición de un modelo de arquitectura y gobernanza funcional que facilite la compartición de casos de uso.
- Definición, desarrollo y validación de casos de uso.

Por estas razones, se hace necesario implantar un sistema común para toda la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid que incorpore casos de uso basados en inteligencia artificial, como la gestión de entrevistas clínicas y la automatización de procesos administrativos (bajas, derivaciones y recetas). Actualmente, el personal médico y de enfermería dedica una parte significativa de su jornada laboral a la introducción manual de datos, lo que reduce el tiempo disponible para la atención directa, personalizada y de calidad a los pacientes. La carga administrativa asociada a la documentación clínica no solo disminuye la eficiencia del sistema, sino que incrementa los costes operativos y contribuye al estrés y desgaste profesional. La automatización mediante inteligencia artificial se presenta, así como una solución transformadora para optimizar los procesos asistenciales, reducir errores, mejorar la eficiencia global y favorecer el bienestar de los profesionales sanitarios.

El contrato se debe llevar a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado, en línea con el enfoque de ejecución que plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El contrato cumple con el principio de neutralidad tecnológica. Los criterios de solvencia y adjudicación, así como las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, se han definido sin imponer tecnologías, marcas o soluciones específicas, garantizando así la libre concurrencia de proveedores con diferentes soluciones técnicas que resulten aptas para satisfacer las necesidades establecidas.

Este principio se materializa de forma efectiva en la configuración del expediente que favorece una concurrencia real y no meramente formal, evitando efectos excluyentes y garantizando la igualdad de trato entre los licitadores en la medida que:

- En la definición del objeto del contrato y en el Pliego de Prescripciones Técnicas no se hace referencia a tecnologías concretas admitiéndose soluciones equivalentes que permiten alcanzar los mismos resultados.
- Los criterios de solvencia económica, financiera, técnica y profesional se establecen atendiendo exclusivamente a la capacidad del licitador para ejecutar el contrato, sin vincularse a tecnologías o productos específicos.
- Los criterios de adjudicación valoran la calidad y viabilidad de las propuestas desde una perspectiva funcional y metodológica, y no la utilización de una tecnología determinada, permitiendo soluciones técnicas equivalentes siempre que cumplan los requisitos establecidos.

De este modo, la neutralidad tecnológica se garantiza de manera transversal en el objeto del contrato, en la definición de los requisitos técnicos, en la configuración de los criterios de solvencia y adjudicación y en la promoción de una competencia adecuada, conforme a los principios que rige la contratación pública.

Se trata de un contrato mixto por contener prestaciones propias de servicios y suministro, y encontrarse ambas prestaciones directamente vinculadas entre sí manteniendo una relación de complementariedad que exige su consideración y tratamiento como una unidad funcional, el régimen jurídico y las normas que regirán la adjudicación, son las normas del contrato de servicios, por ser esta la prestación principal al tener un importe superior a las prestaciones de suministro. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 18 y 34.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El expediente se tramita mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación en base a los siguientes argumentos:

- Primero: el procedimiento abierto con pluralidad de criterios es uno de los procedimientos ordinarios de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas (Artículo 131.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público)
- Segundo: el contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos 131.2 y 156.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
- Tercero: la justificación de la pluralidad de criterios de adjudicación es conforme a lo dispuesto en los artículos 145 de la LCSP respecto a los requisitos y clases de criterios, atendiendo en este caso a una mejor relación calidad-precio sobre la base del precio o coste, y 146 de la LCSP en lo que respecta a su aplicación.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En la determinación de los criterios se ha dado preponderancia al criterio precio otorgándole un 70% de la puntuación total, fijando en el 25% los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y un 5% mediante un criterio evaluable mediante la aplicación de fórmulas.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		PUNTUACIÓN MÁXIMA
A. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor / SOBRE 2		30
A.1	Planificación del proyecto	8
A.2	Solución tecnológica	14
A.3	Plan de transferencia	4
A.4	Plan de formación	4
B. Criterios/subcriterios evaluables mediante aplicación de fórmula matemática /SOBRE 3		70
B.1	Precio	70
TOTAL		100

A. Criterios cuya cuantificación depende de un Juicio de Valor (máximo 30 puntos)

Dado que el objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio técnico especializado, en el que la calidad de la adecuación de la propuesta metodológica es determinante para el éxito del mismo, se incorporan criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor. Estos criterios permitirán seleccionar la oferta que mejor responda a las necesidades del órgano de contratación y así poder conseguir una mejor “calidad/precio”, conforme a lo previsto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Los licitadores presentarán una memoria técnica (sobre nº 2) sobre la prestación del servicio evaluándose los siguientes aspectos:

A.1. Planificación del proyecto (máximo 8 puntos)

Se valorará la adecuación de la planificación, incluyendo la definición de tareas, recursos técnicos, entregables asociados y la coherencia de la planificación global en relación con los requerimientos establecidos en el pliego. Asimismo, se evaluará la gestión de riesgos e imprevistos vinculados a la planificación, valorando la identificación de riesgos potenciales, las medidas de mitigación propuestas y el grado de realismo y detalle del cronograma presentado. Se tendrá en cuenta la descripción de la asignación de recursos a cada tarea, así como la evidencia de que la planificación refleja una comprensión adecuada de las necesidades a cubrir con el proyecto. Adicionalmente, se valorará la metodología global del proyecto, la definición del equipo de trabajo y sus roles, así como la especificación de los mecanismos que aseguren la

calidad, interoperabilidad, seguridad y trazabilidad en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software. La metodología deberá integrar, de forma explícita, procesos de verificación y validación continuos, incluyendo pruebas continuas en cada fase.

Justificación: En entornos complejos como los sistemas de información sanitaria, la planificación es un factor crítico afectando de manera directa a su éxito. Una correcta planificación establece en qué plazos se va a desarrollar y con qué medios, evitando desviaciones, retrasos y sobrecostos, con lo que es un factor determinante para la consecución de la mejor relación calidad-precio. Asimismo, facilita el control del progreso y la calidad del desarrollo, ya que define hitos, entregables y criterios de validación que aseguran que el producto final cumpla con los requisitos funcionales y técnicos establecidos. Una planificación rigurosa garantiza la interoperabilidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema, minimizando el riesgo de fallos o discontinuidades en el servicio. En definitiva, la planificación es el elemento que integra y coordina todos los componentes del proyecto, asegurando su viabilidad técnica, económica y temporal; con lo que una planificación detallada ayuda, de forma decisiva, a escoger al proveedor con la mejor capacidad de ejecución real, lo cual es fundamental para el éxito de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial. En el contexto de un servicio técnico especializado como el desarrollo de los servicios necesarios para la implantación y puesta en producción de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial para la transcripción de voz y generación de informes estructurados en consultas médicas presenciales, en los Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, no basta con que un proveedor tenga experiencia o capacidades tecnológicas; es necesario que demuestre una aptitud para planificar de forma coherente y minuciosa, gestionar recursos, anticipar riesgos y definir entregables, aspectos que son fundamentales para garantizar el éxito del proyecto. El juicio de valor en este criterio permite ir más allá de la mera verificación formal, evaluando la coherencia de la planificación global en relación con los requerimientos del pliego, la definición detallada de tareas, la correcta asignación de recursos técnicos y la consistencia de los entregables asociados.

A.2. Solución tecnológica (máximo 14 puntos)

Se valorarán la adecuación de la solución técnica ofertada, su arquitectura, la viabilidad y rendimientos previsibles, la satisfacción de los requisitos funcionales y no funcionales y la integración, si cabe, con otros sistemas; cómo se ha definido la solución técnica de forma clara y concisa y ajustada a los requerimientos del pliego. Asimismo, se valorará la gestión de riesgos relativa a la solución, con identificación de riesgos y acciones mitigadoras propuestas; lo realista y detallado de la solución, y que de la descripción realizada de la solución se demuestre que se comprenden las necesidades que se quieren cubrir con el proyecto.

Justificación: Dado que el objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio técnico especializado este criterio permite garantizar que la propuesta seleccionada no solo cumpla con los requisitos, sino que sea técnicamente sólida, viable y alineada con los objetivos del proyecto y sostenible en el tiempo, algo que no podría asegurarse únicamente mediante la aplicación de criterios automáticos. Asimismo, mediante este juicio de valor se evalúan la adecuación de la solución técnica ofertada, su arquitectura, la viabilidad y rendimientos previsibles, la satisfacción

de requisitos funcionales y no funcionales, así como su posible integración, si cabe, con otros sistemas. Además, se valora específicamente la gestión de riesgos relativa a la solución, que incluye la identificación de riesgos y las acciones mitigadoras propuestas. En un entorno de sistemas de información sanitaria, esta evaluación cualitativa es crucial porque permite analizar la adecuación de la metodología propuesta al contexto del proyecto, el cual busca evitar los riesgos de obsolescencia, denegación de servicio o amenazas de ciberseguridad, y la capacidad del contratista para identificar correctamente los riesgos y proponer medidas realistas. Por todo ello, es imprescindible que de la descripción realizada de la solución se demuestre que el licitador comprende plenamente las necesidades que se quieren cubrir con el proyecto. Una solución técnica bien fundamentada es crítica, ya que evita futuros problemas de mantenimiento, lo cual es de vital importancia para el ciclo de vida del sistema de transcripción de voz. De forma adicional, este criterio asegura que la renovación tecnológica del sistema se realice bajo una propuesta que garantice no solo el cumplimiento inmediato de las tareas, sino también la operativa segura en los próximos años.

A.3. Plan de transferencia (máximo 4 puntos)

Se valorará que la planificación de la transferencia del servicio indique el conjunto de actividades necesarias para realizar la correspondiente transferencia de conocimiento y datos tanto al equipo humano de la DGSD como quien ésta determine que reciba el servicio. Este Plan deberá garantizar, además, el correcto traspaso de servicios garantizando la continuidad del servicio con el mínimo impacto en las operaciones diarias. Se valorará el detalle concreto de la planificación propuesta, las herramientas, las actividades y las sesiones de traspaso indicando participantes, número de sesiones y tipología o contenido de las mismas.

Justificación: La planificación de la transferencia del servicio es un componente crítico para garantizar la continuidad operativa del sistema y la sostenibilidad del servicio una vez finalizada la ejecución del contrato. Este aspecto adquiere especial relevancia al estar directamente vinculado con los principios de eficacia, eficiencia y adecuada gestión de los recursos públicos, así como con la obligación del adjudicatario de asegurar una correcta reversión o entrega del servicio en condiciones que no comprometan la operativa de la Administración. Una planificación detallada del traspaso de conocimiento permite definir de manera estructurada las actividades, responsables, entregables y cronograma asociados al proceso de transferencia, garantizando que el personal técnico definido por la Comunidad de Madrid asimile los procedimientos, herramientas, configuraciones y metodologías necesarias para mantener el sistema en condiciones óptimas.

En un entorno sanitario como el del Servicio Madrileño de Salud, la correcta transferencia del servicio resulta esencial para evitar riesgos de discontinuidad, errores operativos, pérdida de información o vulneraciones de seguridad. La planificación de esta fase debe contemplar mecanismos de documentación exhaustiva, sesiones formativas estructuradas y procedimientos de validación que aseguren la trazabilidad y la integridad de la información transmitida. Asimismo, esta planificación debe reflejar una comprensión completa de las interdependencias con otros sistemas y servicios, de modo que el conocimiento transferido no se limite al software en sí, sino

que abarque su integración dentro del ecosistema tecnológico y asistencial del Servicio Madrileño de Salud.

Por todo ello, la valoración mediante juicio de valor del plan de transferencia permite evaluar la solidez metodológica de la propuesta, la claridad en la definición de roles y responsabilidades, la adecuación de los medios y recursos previstos, y la coherencia temporal del proceso. Este criterio garantiza que la propuesta adjudicataria no solo cumpla formalmente con la entrega de documentación o sesiones informativas, sino que asegure un verdadero proceso de asimilación y autonomía operativa por parte de los equipos públicos, preservando la continuidad asistencial, la calidad del servicio y la seguridad del dato sanitario en el tiempo.

A.4. Plan de formación (máximo 4 puntos)

Es importante realizar una formación adecuada para un uso eficiente de la aplicación por parte de los usuarios de la misma.

Se valorará como el plan garantiza el conocimiento de los usuarios del sistema (tanto funcionales como técnicos) para su uso y gestión del servicio. Se valorará el detalle concreto de las sesiones de formación indicando participantes, número de sesiones y tipología o contenido de las mismas. Así mismo se valorará la documentación propuesta para abordar la formación, divulgación y comunicación del nuevo sistema.

Justificación: La metodología con la que se vayan a prestar los servicios y su encaje con la forma de trabajar de la Administración (tanto de la DGSD como del SERMAS) supone una diferencia entre proveedores que hace que la ejecución de los proyectos pueda suponer una mayor o menor coste de gestión para la Administración. Por ese motivo se ha propuesto este criterio de valoración para poder determinar mejor que propuestas ofrecen un mayor valor.

La complejidad tecnológica inherente a las soluciones de Inteligencia Artificial, unida a la diversidad de perfiles implicados (personal médico, de enfermería y administrativo), hace necesario valorar la calidad y el alcance y adecuación del plan de formación, incluyendo la metodología formativa, los contenidos, la adaptación a los distintos roles y las acciones de refuerzo orientadas a garantizar la continuidad del servicio.

Un plan de formación adecuado contribuye de forma directa a minimizar riesgos operativos, reducir errores de uso y favorecer la aceptación de la solución por parte de los profesionales, aspectos que inciden directamente en la calidad del servicio prestado. La valoración del plan de formación como criterio de adjudicación permite identificar la oferta que aporta un mayor valor añadido en términos de calidad, sostenibilidad y eficacia en la implantación de la solución.

Reglas de puntuación

A continuación, se detallan los valores de puntuación que se otorgarán a cada uno de los criterios:

- Excelente (100% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta excelentemente detallada, en todos los aspectos requeridos y para todos los componentes del ámbito de aplicación, con gran aporte de valor para los requisitos del contrato.
- Alta (80% de la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta muy bien detallada en los aspectos requeridos, con una muy buena adaptación a la problemática de los componentes del ámbito de aplicación del expediente.
- Medio (60% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta bien detallada en los aspectos requeridos, adaptada de forma suficiente a la problemática de los componentes del ámbito de aplicación del expediente.
- Bajo (40% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta con un nivel bajo de detalle en los aspectos requeridos, generalista o no adaptada de forma suficiente a la problemática de los componentes del ámbito de aplicación del expediente.
- Muy bajo (10% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Se asignará esta valoración a aquellas ofertas que presenten una propuesta extremadamente generalista, o con un nivel de detalle muy bajo en los aspectos requeridos.

NOTA: No se incluirá información evaluable mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que debe ser incluida en el sobre nº3. La inclusión en el sobre nº2 de información concerniente al sobre nº3 podrá suponer, atendiendo las especiales circunstancias, la exclusión del licitador.

B. Criterios evaluables mediante aplicación de fórmula matemática

Hasta un máximo de 70 puntos.

B.1. Criterio Precio

Hasta un máximo de 70 puntos.

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Pi = 70 * \sqrt[6]{\frac{BL}{BM}}$$

donde:

Pi = Puntuación otorgada al licitador.

BL = Baja del licitador respecto del Precio Máximo de Licitación

BM = Mayor baja de todas las ofertas válidas presentadas.

Baja = Precio máximo de licitación – Precio de licitación ofertado por el licitador.

Las ofertas cuyo Precio ofertado supere el Precio máximo de licitación en su conjunto o en cada uno de sus conceptos (suministro y servicios) se excluirán.

En el caso de que todas las ofertas presentadas lo hagan al tipo de licitación todas ellas obtendrán 0 puntos en este concepto.

Se ha establecido una fórmula en la que los valores que resultan de su utilización responden a una distribución proporcional de los puntos a asignar. Otorga una puntuación de 70 puntos, respetando los principios de proporcionalidad y reparto equitativo de las puntuaciones, cumpliendo la condición de que ofertas más económicas no pueden recibir una puntuación inferior a la otorgada a ofertas menos económicas, guardando la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales en el criterio Precio, siendo los límites para apreciar que se da en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un único licitador, se considerará que incurre en presunción de valor anormal si su oferta es inferior al presupuesto de licitación en más de 20 unidades porcentuales.
- En el caso que sean varias las ofertas, se considerará como desproporcionada o anormal, las que sean inferiores en 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas.

Si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.b) de la LCSP cuando los pliegos prevean la aplicación de más de un criterio de adjudicación los parámetros objetivos para determinar que una oferta se encuentra incurso en baja anormal o desproporcionada deben basarse en el conjunto de la oferta, esto es, en el conjunto de los criterios de adjudicación, se ha de indicar que en el presente expediente los criterios cualitativos establecidos valoran aspectos como la planificación del proyecto, solución tecnológica, el plan de transferencia, el plan de formación y la adecuación funcional al entorno asistencial. Estos criterios permiten identificar la mejor propuesta técnica. Sin embargo, la eventual anormalidad de una oferta no se vincula a su calidad técnica, sino a la suficiencia del precio para cubrir todos los costes derivados del contrato. Una oferta puede obtener una elevada puntuación técnica y, sin embargo, presentar un precio insuficiente para sostener dichos costes estructurales, comprometiendo la correcta ejecución del contrato en un entorno asistencial crítico.

Por ello resulta jurídicamente coherente que la identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad se realice exclusivamente sobre la base del precio ofertado, al ser este el único elemento que permite detectar objetivamente un posible riesgo de inviabilidad económica. La determinación de ofertas incursas en presunción de anormalidad exclusivamente en función del criterio precio, pese a existir otros criterios de adjudicación, resulta conforme con el artículo 149

LCSP y plenamente justificada en el presente contrato, dado que la anormalidad se refiere a la viabilidad económica de la oferta y no a su calidad técnica. De este modo se garantiza objetividad, seguridad jurídica y adecuada protección de interés público en un contrato tecnológicamente complejo y crítico para el funcionamiento de la Atención Primaria.

CRITERIOS DE SOLVENCIA

La relación calidad-precio se pretende garantizar también con la solvencia económica, la solvencia técnica y el compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales solicitados, debido a la especificidad técnica y el perfil del personal que se ha de adscribir al servicio, tal como viene recogido en el artículo 76.2 de la LCSP.

El empresario deberá acreditar requisitos de específicos de solvencia, ya que los servicios objeto de este contrato y el CPV no están incluidos en el Anexo II del RGLCAP y, por lo tanto, no procede solicitar clasificación.

Solvencia económica y financiera

Conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 87 de la LCSP, el criterio para acreditar la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario y de presentación de las ofertas. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato.

El importe anual solicitado para la solvencia económica y financiera (2.162.400,00 €) se ha calculado multiplicando el valor estimado del contrato por 1,5.

Solvencia Económica = $1.441.600,00 \text{ €} * 1,5 = 2.162.400,00 \text{ €}$

Acreditación documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de estar inscritos en el Registro Mercantil se acreditará mediante certificación expedida por el Registro Mercantil o por medio de copia de las cuentas depositadas expedida por dicho registro. En el caso de aportarse únicamente el certificado deberá acompañarse de una copia de las cuentas presentadas.

Justificación: La exigencia de solvencia económica y financiera en el presente contrato consistente en la implantación y puesta en producción de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial para la transcripción de voz clínica, generación de informes estructurados y provisión de infraestructura en nube pública, se justifica en la necesidad de garantizar que los licitadores

disponen de una capacidad económica suficiente para afrontar, desde el inicio del contrato, las obligaciones económicas derivadas de su ejecución.

El volumen anual de negocios del licitador constituye un indicador adecuado y proporcionado de su capacidad económico-financiera, al reflejar su aptitud para asumir compromisos económicos relevantes sin comprometer la correcta ejecución del contrato ni generar riesgos de interrupción del servicio.

El umbral mínimo exigido cumple con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y guarda una relación directa y proporcional con el objeto, alcance y características del contrato.

Asimismo la posibilidad de acreditar la solvencia mediante el volumen de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, atendiendo a la fecha de constitución o de inicio de actividad del empresario, y su acreditación a través de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, garantiza la objetividad, verificabilidad y transparencia del requisito, sin introducir restricciones injustificadas a la libre competencia.

Por tanto, el nivel de solvencia económica y financiera exigido permite minimizar el riesgo asociado a la ejecución del contrato, proteger adecuadamente el interés público y al mismo tiempo, favorecer la participación de licitadores que cuenten con una estructura financiera suficiente, respetando los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y competencia efectiva.

Solvencia técnica o profesional

Conforme a la letra a) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 90 de la LCSP, la empresa deberá acreditar la ejecución de servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, Para verificar la similitud se comparará el objeto del contrato ejecutado con el que es objeto de esta licitación. Además, y para el caso de los contratos públicos, se podrá acudir a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV como elemento comparativo. En el conjunto de los certificados aportados se podrá acreditar solo uno o los dos códigos CPV.

El importe anual acumulado de los certificados, en el año de mayor ejecución, deberá ser igual o superior a 1.009.120,00 €.

El importe anual solicitado para la solvencia técnica o profesional (1.009.120,00 €) se ha calculado teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 90.2 de la LCSP, en el que se indica que, el importe anual acumulado de los servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, debe ser igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato.

Se ha multiplicado el importe sin IVA del contrato por 0,7.

Solvencia Técnica = 1.441.600,00 € * 0,7 = 1.009.120,00 €

Acreditación documental:

- Relación firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
- Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Los certificados deben incluir el objeto del servicio lo más detallado posible, el importe por periodos anuales, las fechas y el destinatario, público o privado de los mismos.

Justificación: La correcta ejecución del contrato exige que el adjudicatario cuente con experiencia previa en proyectos de naturaleza igual o similar, en los que se hayan abordado el desarrollo, implantación y puesta en producción de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial para la transcripción de voz clínica y generación automatizada de informes estructurados, con infraestructura en nube pública, todo ello en un entorno sanitario con tratamiento de datos de salud. La ausencia de dicha experiencia comprometería la ejecución del contrato generando transcripciones inexactas, informes clínicos inconsistentes, deficiencias en la integración con los sistemas sanitarios existentes y riesgos en materia de seguridad de la información y protección de datos de categoría especial, con el consiguiente impacto en la actividad asistencial y en la calidad del servicio prestado.

Se considera adecuado exigir la acreditación de la realización de servicios o trabajos de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, ejecutados como máximo en los tres últimos tres años, de conformidad con lo previsto en el artículo 90.2 de la LCSP. Esta limitación temporal responde a la necesidad de asegurar que la experiencia acreditada sea reciente y técnicamente actualizada, habida cuenta de la rápida evolución de las tecnologías y herramientas software vinculadas al tratamiento y gestión de datos.

El importe mínimo anual exigido para acreditar dicha solvencia, fijado en 1.009.120,00 €, guarda relación directa y proporcionada al valor estimado del contrato y con el presupuesto base de licitación, garantizando que los licitadores disponen de una experiencia económica relevante en proyectos comparables, sin que ello suponga una restricción injustificada de la concurrencia.

La acreditación mediante certificados de buena ejecución permite verificar de forma objetiva la realidad de los trabajos realizados, su correcta ejecución y su adecuación al objeto contractual. En el caso de contratos del sector público, se admite la identificación de los trabajos mediante los tres primeros dígitos de los correspondientes códigos CPV, lo que aporta seguridad jurídica homogeneidad y facilidad de comprobación.

En consecuencia, la solvencia técnica y profesional exigida resulta adecuada, necesaria y proporcionada, al tiempo que asegura la correcta ejecución del contrato, minimizar los riesgos técnicos asociados a su desarrollo y respeta los principios de igualdad de trato, transparencia y competencia efectiva.

Concreción de las condiciones de solvencia

1. Especificación en la oferta de los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: NO
2. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales: SI

En virtud de lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, todas las empresas deberán presentar una declaración responsable según modelo del ANEXO III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a incluir en el sobre 1, en la que se comprometan a adscribir un equipo mínimo conforme a lo establecido en el apartado 10 “EQUIPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO” del pliego de prescripciones técnicas, el cual deberá cumplir con los requisitos mínimos de titulación, formación y experiencia exigidos en dicho apartado.

A este compromiso, referido a la adscripción de medios personales y que se integrará en el contrato, se le atribuirá el carácter de obligación esencial, a los efectos de lo previsto en el artículo 211.1.f) de la LCSP y tendrá una vigencia desde su firma hasta la finalización del contrato objeto de este expediente de contratación.

En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas, de conformidad con el art. 140.1.c), cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable con la información pertinente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios personales indicados en los párrafos anteriores, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra. Esta documentación deberá presentarse en formato electrónico.

La documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios personales será:

- El currículum de los integrantes del equipo de trabajo a adscribir, señalado u ofertado, que debe cumplir con los requisitos mínimos de titulación, formación y experiencia establecidos en el apartado 10 “EQUIPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO” del pliego de prescripciones técnicas. Dicho currículum deberá presentarse ajustado al modelo establecido en el anexo VI “Cuestionario de Personal” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, especificando la cualificación profesional, con detalle de perfil técnico, titulación, formación y experiencia profesional.
- La copia del correspondiente título, diploma o documento equivalente que acredite la correspondiente titulación y formación.
- La experiencia podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, como entre otros, un certificado expedido por la Administración Pública, o empresa privada en la que han prestado los servicios.

El adjudicatario propuesto deberá aportar el compromiso del personal ofertado, (Compromiso firmado por ambas partes), acreditando su disponibilidad para incorporarse a la plantilla que va a encargarse de la prestación objeto del contrato.

Justificación solicitud adscripción de medios personales

Dadas las características del servicio a desarrollar y la experiencia de la Dirección General de Salud Digital en proyectos de similar naturaleza, se han establecido los requisitos mínimos indicados en el apartado 10 "EQUIPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO" del Pliego de Prescripciones Técnicas, que se consideran adecuados, necesarios y proporcionales, incidiéndose en experiencia en servicios digitales. De esta forma se pretende garantizar la correcta y óptima realización del proyecto.

Los requisitos profesionales solicitados garantizan que las empresas participantes en la licitación disponen de la especialización necesaria en las materias que afectan y están directamente relacionadas con la ejecución de los servicios objeto del contrato, como es la normalización, estandarización y homogeneización de datos sanitarios. De igual manera, los requisitos profesionales exigidos permiten asegurar que los perfiles que van a llevar a cabo la ejecución del proyecto poseen un conocimiento experto que permita afrontar cualquier posible eventualidad relacionada con el contrato y aportar soluciones viables, desde el punto de vista técnico y funcional, del mismo modo que permiten que los trabajos se desarrollen con la máxima exactitud y precisión.

Así pues, los requisitos profesionales exigidos se consideran razonables, adecuados y proporcionales al objeto del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76.3 de la LCSP.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

De acuerdo con el art. 99.3.b) de la LCSP, se ha determinado la no división en lotes del presente contrato al considerarse que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no es posible e impediría la correcta ejecución del mismo, pues abarca la implantación y puesta en producción de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial para la transcripción de voz y generación de informes estructurados en consultas médicas presenciales de los Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo de las integraciones necesarias en el sistema de historia clínica empleado en Atención Primaria de la Comunidad de Madrid (APMADRID) para obtener un sistema completo que satisfaga las expectativas de los pacientes y profesionales sanitarios.

Al ser decisiones conectadas y dependientes entre sí con repercusión directa en el paciente se hace imprescindible que se controlen y ejecuten por una sola entidad. Además, cualquier división aumentaría la complejidad de su control y sería inasumible por la dotación de personal con la que cuenta la DGSD.

La división en lotes plantea otro problema añadido y es que, en el supuesto de que alguno se quede desierto, se generaría un problema a la hora de garantizar la correcta ejecución del aplicativo. El no funcionamiento de un lote supondría la paralización del conjunto o de una parte del servicio, que funciona como un todo y no se podría solucionar con rapidez.

El objeto de este expediente exige una planificación coherente y una coordinación en cuanto a los recursos humanos y materiales, que se garantizan mediante un tratamiento unitario teniendo en cuenta que las distintas prestaciones del servicio vienen derivadas de un mismo acto clínico.

Como consecuencia de lo anterior, con un expediente único garantizamos una responsabilidad sobre los servicios contratados que no es cuestionable al recaer sobre el mismo adjudicatario la prestación del servicio en su totalidad.

Por todo lo anterior se considera justificado que la licitación no se establezca mediante lotes, con el fin de que la prestación del servicio y la responsabilidad sobre el mismo recaigan en un único contratista en su totalidad. Se resuelve de este modo la complejidad técnica que supone que las secuencias encadenadas se ejecuten con fluidez, implicando a las distintas partes afectadas: centro médico, facultativos y ciudadano.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En la línea de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 202 de la ley 9/2017, para la ejecución de este contrato, se fijan las siguientes consideraciones de tipo social como condiciones especiales de ejecución del contrato que deberá aportar el licitador propuesto como adjudicatario.

Como condición especial de ejecución el propuesto como adjudicatario deberá presentar una declaración responsable donde se especifique al menos uno de los siguientes criterios de carácter social, vinculados con la prestación del servicio que se oferta:

1. Que, en el caso de nuevas contrataciones, bajas o sustitución de las personas trabajadoras ligadas al contrato, se favorezca la contratación de trabajadores desempleados.

Para su acreditación se exigirá relación firmada por el representante legal de la empresa del personal adscrito al contrato al inicio de su ejecución y copia del nuevo contrato que acredite la condición de desempleado.

2. Que se favorezca la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas al contrato a través de medidas tales como flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo, teletrabajo, u otras medidas alternativas.

Para su acreditación se deberá aportar un certificado durante la vigencia del contrato donde se especifique el número de empleados adscritos al contrato acogidos a alguna de las medidas que favorezcan la citada conciliación, indicando las personas acogidas, medida a que se acogen y documentación acreditativa de tales circunstancias. Se aportará un documento firmado entre la empresa

Esta condición especial de ejecución se considera obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Todas estas necesidades solo pueden ser satisfechas por una entidad con la experiencia y los recursos materiales y personales capacitados para ejecutar estas actuaciones, algo indispensable para lograr la correcta ejecución del contrato.

De cara a la correcta realización de estas tareas propias de este proyecto y, por otro lado, la carencia de personal propio con la adecuada especialización en las tareas la implantación y puesta en producción de una solución de transcripción de voz y generación de informes en las consultas médicas presenciales de los Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid basada en tecnologías de Inteligencia Artificial se hace necesario impulsar este expediente.

Para la correcta realización del objeto de este contrato es necesario disponer de una plantilla con los perfiles solicitados (Jefe de Proyecto, Consultor, Arquitecto de Sistemas, Ingeniero, Analista y Analista-Programador). Se trata de perfiles con una cualificación técnica con conocimientos avanzados en tecnologías de Inteligencia Artificial. El personal disponible carece de cualificación técnica específica necesaria para realizar el objeto del contrato. Ante la ausencia de recursos internos suficientes se hace necesario contratar con terceros para asegurar la calidad, eficacia y viabilidad del proyecto.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LCSP, se justifica la necesidad de contratar con terceros especializados que presten el servicio acorde a las indicaciones especificadas en el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, dada la insuficiencia e idoneidad de los medios propios disponibles para llevar a cabo la ejecución del contrato.


Es por ello que se considera necesario e imprescindible proceder a la contratación de los servicios especializados que aporten el conocimiento técnico, la experiencia y los recursos necesarios para garantizar una implantación eficaz, segura y sostenible de la solución de transcripción de voz, asegurando su correcto funcionamiento y evolución en un entorno asistencial crítico como es la Atención Primaria.

CONCLUSIÓN

Para dar cumplimiento a las necesidades descritas, se propone la contratación de los servicios y el suministro de TRANSCRIPCIÓN DE VOZ Y ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES EN CONSULTAS MÉDICAS EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, en los términos previstos en los pliegos de referencia, por el plazo de vigencia allí indicado y con el coste detallado en la memoria económica.

Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: NURIA RUIZ HOMBREBUENO - 
Fecha: 2026.02.19 08:50